

Globethics Repository



Perú [Peru]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Cotler, Julio
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-15 07:24:21
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220197

Perú. El referéndum y la disputa por el Estado

Cotler, Julio

Julio Cotler: Sociólogo peruano. Investigador del Instituto de Estudios Peruanos - IEP, Lima.

El 31 de octubre de 1993, el referéndum convocado por el gobierno aprobó por un estrecho margen de 4% el proyecto constitucional destinado a legitimar el autoritarismo de Fujimori. Este resultado ha sido interpretado como una derrota política del gobierno, más si se considera que Fujimori planteó la contienda electoral en términos plebiscitarios. En seis departamentos la propuesta oficial triunfó y en once perdió, en ambos casos por un margen mayor de 2%. Mientras que en ocho departamentos los resultados dieron un casi empate, dado que la diferencia entre el SI el NO era igual o menor a este margen. Los votos favorables al SI se distribuyeron mayoritariamente en la zona central del país, particularmente en Lima, que cuenta con alrededor del 40% del electorado; mientras que los votos por el NO se concentraron en el norte y en el sur andino.

Se estima que el ausentismo electoral fue de alrededor del 35%, proporción que en la sierra oscila entre el 45% y el 55%, mientras que los votos blancos y nulos sumaron alrededor del 10% del total.

Es decir que, de aproximadamente doce millones de electores, la constitución ha sido aprobada por un poco más de tres millones. El estrecho margen de diferencia entre el SI y el NO ha dado pie a que se plantee la existencia de una división del electorado, que polariza Lima y su hinterland con el resto del país, lo que expresaría el conflicto latente entre el centro y la periferia, particularmente la andina. Esto ha motivado que la oposición reclame al gobierno un acuerdo para modificar los aspectos más controvertidos de la nueva constitución y para establecer una relación que asegure la estabilidad política, conducente a la plena recuperación democrática del país.

Desilusión oficial

El presidente creyó que el consistente apoyo a su gestión registrado por las encuestas se trasladaría automáticamente a los votos. Razón para que sus voceros se ufa-

naran de un triunfo seguro con una diferencia de 40%; sin embargo, el oficialismo no obtuvo ese éxito ni en su plaza fuerte de Lima. De ahí que, conocidos los resultados extraoficiales, el gobierno dejara de referirse a los resultados electorales, el presidente y sus voceros adoptaran un «perfil bajo» y los medios de comunicación, principalmente los televisivos, buscaran desviar la atención del público concentrándose en la crónica roja. El caudal de votos contrarios a la constitución y, en esa medida de censura al presidente, es particularmente significativo en vista del capital político acumulado por Fujimori y los múltiples recursos que desplegó en la seguridad de obtener una victoria contundente contra los divididos y debilitados adversarios.

La desarticulación de los movimientos subversivos, la disminución de la inflación, el respaldo de los organismos internacionales de crédito y la expectativa creada por el oficialismo sobre el inminente ingreso masivo de capitales extranjeros han constituido parte importante del capital del gobierno. Este fue complementado con la distribución de recursos públicos en los barrios populares por Fujimori, el monopolio publicitario en los medios televisivos, las intervenciones militares, los ataques contra los que se manifestaban por el NO y, por último, el chantaje de Fujimori al anunciar su intención de renunciar en caso que los resultados le fueran adversos.

La derrota política del gobierno es una singular advertencia de un cambio de ánimo de la población y, eventualmente, del escenario político, amenazando desbaratar los propósitos de Fujimori de reelegirse en 1995 y seguir gobernando tecnocráticamente con los militares y los empresarios. Pero ello no puede dar pie para suponer, como algunos incautos creen, que los votos por el NO otorgan un respaldo al viejo orden político y a sus representantes. En efecto, estos cambios reflejan el rechazo y hastío por el conjunto de las prácticas políticas conocidas. Este resultado descalifica las explicaciones culturalistas, que buscan interpretar el apoyo de Fujimori debido a la predominante cultura autoritaria fundada en la herencia colonial, de la que los opositores al gobierno estarían inmunizados. La descalificación de esta explicación arrastra también la interpretación que enfatiza la existencia de un fatalismo autoritario debido a la tradición ibérica; y también a la redomada tontería, para decirlo suavemente, sustentada por Alvaro Vargas Llosa respecto a que el Perú es una «barbarie contenta»¹.

Igualmente los resultados anulan las versiones oficialistas que han caracterizado a los que votaron por el SI como «modernos» - y pragmáticos - en función de la acti-

¹V. César Hildebrandt: «Insurrecta Barbarie» en Oiga, Lima, 15/11/93.

tud con respecto al mercado, sin consideraciones por la vigencia de la democracia, los derechos ciudadanos de naturaleza económica y social. Esta posición es muy tradicional y Croce la denominó liberismo para contraponerla al liberalismo auténtico. Además, la pobreza de este argumento salta a la vista, cuando se sabe que muchos de los que han votado por el SI favorecen la intervención del Estado en la economía; y muchos de los que se inclinaron por el NO están de acuerdo con el desarrollo del mercado, pero en el marco democrático como condición necesaria para una mejor distribución de los recursos colectivos.

Es así como ambas interpretaciones invierten sus calificativos: mientras para los que sustentan las tesis culturalistas el apoyo a Fujimori es propio del autoritarismo tradicional, para los oficialistas es una muestra de la «modernidad»; mientras que el rechazo al presidente es para los primeros una expresión de la vocación democrática, para los gobiernistas constituye una expresión de la «tradicionalidad». A diferencia de estos artículos, la mayoría de las explicaciones sobre los resultados electorales, incluso las del presidente y su entorno, aluden a las nuevas condiciones políticas que ha generado el gobierno y a las actuaciones de la diversa gama de intereses que constituye la «oposición». De esta manera, la mayoría se inclina por la consideración de que los hechos políticos requieren explicaciones políticas.

Las de naturaleza coyuntural hacen referencias a los efectos de la propaganda televisiva y a los gestos populistas de Fujimori; al uso que se le quiso dar al epistolario Guzmán-Fujimori; a las noticias sobre los «desaparecidos» de La Cantuta² y a los intentos del gobierno para ocultarlas y desfiguralas, y así sucesivamente.

Nuevos intereses sociales

Pero, más allá de estas interpretaciones inmediatistas, los resultados electorales dan cuenta de un problema estructural que recobra una importancia cardinal; esto es, la presencia y el rol del Estado. El voto afirmativo responde a la convocatoria plebiscitaria de Fujimori. Es decir, respalda el mantenimiento del orden público y la estabilidad política fundada en la concentración del poder presidencial, así como en la esperanza de que sus medidas ultraliberales favorezcan el ingreso del capital extranjero y la dinamización económica. La apuesta al reinado del mercado - aunque a veces a regañadientes, como en el caso de los empresarios - subordina los

²Hace más de un año «desaparecieron» nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, situada en La Cantuta, cerca de Lima. Posteriormente se descubrió que habían sido asesinados y calcinados por los militares allí estacionados. Este nuevo atentado contra los derechos humanos ha sido motivo de escándalo político nacional e internacional.

problemas de la democracia, los derechos humanos y el calamitoso estado de las empresas y de los trabajadores a aquellos objetivos -.

El voto negativo es complejo. Como muchos comentaristas lo han expresado, el NO expresa múltiples y muy diferenciados estados de ánimo y demandas particulares, por lo que nadie puede apropiarse de su representación; por esto la imagen de una polarización política es insostenible. Sin embargo, los votos por el NO se caracterizan porque persiguen asegurar y expandir los derechos ciudadanos y, en esa medida, consolidar el Estado de Derecho, sin que ello se haga a costas del orden, la estabilidad y el crecimiento económico.

En otra ocasión³ afirmamos que la novedad de la campaña electoral era la emergencia de diversos intereses sociales concretos, despegados de las tradicionales identidades políticas; por esto, la actual geografía electoral no responde a los antiguos enclaves políticos. Esta situación puede tener una crucial importancia: si hasta fines de la década pasada la «politización de la sociedad» era la clave para comprender el comportamiento social, la crisis de los partidos ha dado lugar a la emergencia de intereses sociales relativamente autónomos, que darían cuenta de la formación de una «sociedad civil». En efecto, el proyecto constitucional y, en general, la actuación gubernamental han dado paso a la emergencia de grupos de intereses concretos que persiguen, por ejemplo, suprimir la pena de muerte y e Habeas Data, eliminar las disposiciones que legitiman la hiper-concentración del poder y la reelección presidencial así como la dependencia del poder judicial al Ejecutivo. Pero también abundan las exigencias para que el Estado asuma la responsabilidad y la gratuidad de la educación, la generación de empleos y la estabilidad laboral, otorgue recursos y autonomía municipal y regional, y, en términos más generales, que modifique la orientación económica para crecer y distribuir equitativamente los recursos sociales.

Paradójicamente, en la medida que el gobierno ha tenido éxito en dismantelar la subversión y abatir la inflación, el conflicto (trade-off) entre estos problemas y la democracia se ha ido desvaneciendo, facilitando que resurjan a un primer plano las demandas económicas, sociales y, con ellos, las relativas a la participación y representación ciudadana. De ahí que, en diversas encuestas, los aspectos de la constitución que los encuestados consideran necesario modificar sean los referentes a estos temas.

³J. Cotler: «El Referéndum y el futuro de la democracia» en Argumentos N° 11, 9-1993, IEP, Lima.

El segundo rasgo común de los votos por el NO es su distribución geográfica. A cuenta de posteriores análisis de los resultados electorales, la impresión que se recoge es que la preferencia por el NO se concentra, como se dijo, en la «periferia». Ello tendría que ver con el hecho de que en esta área la presencia histórica del Estado ha sido muy reducida y nefasta; de ahí que las demandas para que intervenga de manera activa y positiva es muy fuerte para suplir la carencia de un mercado dinámico, a diferencia de lo que ocurre en Lima y su hinterland. En este sentido el voto de la periferia no tendría que ver con el carácter «moderno» o «tradicional» de los electores, sino con sus expectativas relativas al papel que debe tener el Estado. Por esto, contrariamente a los que desde 1990 consideran que el voto popular es «irracional», las preferencias de la periferia expresan un voto profundamente racional. Este reclamo provinciano y, en esa medida, anti-centralista viene de muy atrás; pero hoy parece adquirir rasgos críticos que, en un país tan heterogéneo y fragmentado como el Perú, puede tener consecuencias trágicas si no se atiende. Por ejemplo, Daniel Estrada, alcalde de Cusco, al día siguiente del referéndum ha señalado la necesidad de federalizar el país para resolver dicho reclamo y el pronunciamiento que piensa emitir insiste en demandar reconocimiento a los derechos de auto-gobierno de los «pueblos provincianos».

En estas condiciones, cuando la disputa por el rol del Estado pasa a ser la cuestión central, el gobierno de Fujimori se enfrenta a nuevos y cruciales dilemas que no podrá seguir eludiendo. La proximidad de las elecciones de 1995, y sus intenciones de reelegirse, lo obligarán a tomar decisiones concluyentes. Los dilemas de Fujimori serán tanto más difíciles, si los sujetos políticos son capaces de identificar, organizar y congregar las nuevas y diversas demandas sociales. Esperemos que entonces, haciendo de la necesidad virtud, los actores políticos hayan aprendido que la democracia no es un hecho natural, sino una empresa destinada a establecer una convivencia conflictiva, pero dentro de un marco de reglas y procedimientos consentidos y aceptados colectivamente. En esta espera, los peruanos estamos condenados a ser optimistas.

Lima, noviembre de 1993.

Referencias

*Hildebrandt, César, OIGA. 15/11 - Lima, Perú. 1993; *Insurrecta Barbarie*.

*Cotler, J., ARGUMENTOS. 11 - Lima, Perú, IEP. 1993; *El Referéndum y el futuro de la democracia*.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N° 130, Marzo- Abril de 1994, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.